

NÚM. 37

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ACOSTA

33.<sup>a</sup> Sesión ordinaria del 3 de agosto de 1876

SUMARIO

I.—Asuntos entrados.

II.—Terminación del debate sobre el proyecto de ley en revisión, aprobatorio de las reformas á las ordenanzas de aduana, quedando aprobado con modificaciones.

SEÑORES

—  
Alvarez  
Arias  
Argento  
Bazán  
Bárcena  
Bustamante  
Colombres  
Cortés  
Corvalán  
Echagüe  
Frias (L.)  
Frias (U.)  
García  
Gelabert  
Lucero  
Molina  
Navarro  
Oroño  
Rocha  
Vallejo  
Villanueva

En Buenos Aires, á tres de agosto de mil ochocientos setenta y seis, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores al margen inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores Gorostiaga, Pruneda y Sarmiento con aviso, y ausentes de esta capital, con licencia, Torrent y Quintana, y con aviso, Linarez y Rawson.

I

Leída y aprobada el acta de la anterior de 1.<sup>o</sup> del corriente, (32.<sup>a</sup> ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, á saber:

1.<sup>o</sup> Una nota de la honorable cámara de diputados, fecha del día anterior, comunicando no haber aceptado las modificaciones hechas por el senado, en el proyecto de ley que suprime la escuela de minería en Catamarca, y reformando la de San Juan.—(Se des-

tinó á la comisión de legislación).

2.<sup>o</sup> Otra, comunicando la sanción definitiva del proyecto de ley sobre emisión de billetes de tesorería.—(Al archivo, previo aviso de recibo).

3.<sup>o</sup> Una solicitud de los señores Larrovich y Viale, pidiendo privilegio por doce años, ó bien hasta la construcción del puerto de Buenos Aires, para establecer una empresa de salvataje, según las bases que presentan.—(A la comisión de peticiones).

II

**Sr. Presidente**—Se va á pasar á la orden del día, con la discusión del artículo 171 de las ordenanzas de aduana.

—Así se hizo.

**Sr. Frías (U).**—No es mi ánimo renovar la discusión, creo que el punto en cuestión está suficientemente debatido; pero, en atención á la gravedad del asunto, como miembro informante de la comisión, quiero agregar algunas breves observaciones, en apoyo del artículo que se considera.

El principio que él establece es el mismo que rige en la actualidad, según la ley vigente: dice que se entiende ser del deudor ó del fiador, todas las mercaderías que estuviesen en la aduana á nombre de ellos, por consignación ó por transferencia.

Ella supone, como se ve, que antes se han sacado de la aduana mercaderías, cuyos derechos están impagos; porque de otro modo, no habría deudor ni fiador, y que éstos tienen en la aduana otras, por consignación ó transferencia, de que se presume son dueños.

¿Qué objeto puede tener esta disposición? Es claro que sólo el que la aduana pueda y deba pagarse de todos los créditos, contra el deudor y contra el fiador, especialmente contra los créditos anteriores, porque en cuanto á los derechos de las mercaderías que tienen en la aduana, están aseguradas con esas mismas mercaderías, que no pueden extraerse sino pagando los derechos, ya sea al contado, ya sea en letras. Por eso es que la ley los considera dueños de esas mercaderías, y por eso da á la aduana el privilegio de cobrarse en ellas lo que se le deba. De otra manera, la disposición no tiene objeto, es completamente inútil.

La decisión de la corte suprema de los Estados Unidos, citada en la sentencia de la corte suprema de la república, que leyó el señor senador por La Rioja en la sesión anterior, si no estoy equivocado, lo que

establece es, que los Estados Unidos no tienen hipoteca general sobre las mercaderías del introductor, por derechos que adeuda por otras introducciones. Pero esto es muy distinto del privilegio ó preferencia que la ley, en aquel país como en el nuestro, por la disposición de que se trata, se acuerda á los créditos nacionales. Puede haber, y hay privilegio, sin que haya existido ó exista hipoteca, prenda ó cosa parecida, sobre las mercaderías.

Voy á permitirme leer á la honorable cámara, la disposición de los Estados Unidos, análoga á la que se discute, que considera dueño de las mercaderías al consignatario, para obligarlo á pagar los derechos por introducciones anteriores.

Dice así: « Para prevenir los fraudes « que resulten de colusivas transferencias, « se declara que todos los géneros, etc., « importados á los Estados Unidos, para « los efectos de este acto, se considerarán y « tendrán como propiedad de las personas « á quienes dichos géneros, etc., se consig- « nen, no obstante cualquiera venta en con- « trario, cualquiera transferencia, ó cesión « anterior á la entrada y pago, ó fianza del « pago, de los derechos de dichos géneros, « etc., y al pago de todas las obligaciones « debidas entonces y no satisfechas por « dicho consignatario ».

Finalmente, señor presidente, los que sostienen que no debe considerarse al consignatario de las mercaderías, dueño de ellas, sino mientras no se pruebe lo contrario, colocan á la nación en condiciones peores que á los particulares en casos semejantes: éstos en sus contratos con el consignatario, según la ley común, no tienen acción contra los comitentes, ni éstos contra aquéllos, mientras que, según la adición ó enmienda que se propone, vendrá á resultar, que los comitentes y los terceros que han tratado con el consignatario, tendrán acción contra la aduana, que no ha tratado con ellos.

La aduana, como se sabe, representa á la nación; es decir, á la personalidad más alta que puede haber, y no hay motivo alguno para que se establezca respecto de ella, una desigualdad tan injusta, que no tiene razón de ser.—He dicho.

**Sr. Cortés**.—Por más importancia que yo, como el señor senador por La Rioja, dé á la materia en cuestión, considero el punto casi totalmente agotado, y apenas puede agregarse alguna cosa; sin embargo, voy á decir lo que me ocurre.

Yo creo que en la altura en que se encuentra la discusión, se ha demostrado satisfactoriamente, que la legislación que

nos regía hasta ahora, es de todo punto acorde con la de los Estados Unidos, en lo que concierne al punto en cuestión.

Se ha demostrado igualmente, en los términos más concluyentes, que la jurisprudencia establecida entre nosotros por un fallo de la corte suprema de justicia, es perfectamente acorde con la jurisprudencia de los Estados Unidos; que se comprobó así mismo, por una sentencia de la suprema corte, firmada por el juez Story.

Inútilmente se quiere desvirtuar esta resolución, señor presidente, ella está concebida en términos tan claros y precisos, que no dejan lugar á duda.

Se pretende por el señor miembro informante de la comisión, que esa sentencia lo único que declara, es que las mercaderías no quedan hipotecadas en favor del fisco, por los derechos que devengan otras mercaderías que se introduzcan posteriormente, pero que esto no quita el privilegio que el artículo en discusión atribuye al fisco.

No es así. Voy á volverlo á leer. La sentencia de la suprema corte de justicia de los Estados Unidos, no habla de hipoteca, habla de privilegio.

« Los Estados Unidos no tienen privilegio alguno sobre las mercaderías, para el cobro de derechos adeudados por otras anteriormente importadas ».

Entiéndase bien, se dice: lo que quiere establecerse aquí, es que no hay hipoteca; no es lo mismo, en derecho, son totalmente distintos hipoteca y privilegio. Puede haber muy bien privilegio personal sin que haya hipoteca ni prenda, ni derecho real. Por ejemplo, el fisco es un acreedor simplemente privilegiado, cuando se trata de un quebrado, el cual, sin embargo, hoy no tiene hipoteca tácita ni prenda.

La referida sentencia habla de privilegio, no de hipoteca, siendo aquél más genérico y comprensivo que la hipoteca:—pretender, pues, que sólo este derecho se le niega al fisco, es dar á dicha sentencia una interpretación de todo punto arbitraria y que no se armoniza con los términos en que está concebida.

Se han aducido por el señor miembro informante, varias citas, pretendiéndose probar con ellas, que las mercaderías están gravadas para el pago de los impuestos en los Estados Unidos, por todas las deudas que en cualquier concepto pueda tener el introductor.

Los textos que se han citado á este respecto, lo que quieren decir es, que cada mercadería sirve de prenda á los derechos que ella misma devenga.

También se ha alegado que en la consi-

gnación hay la especialidad de que, en los contratos sobre las cosas á que se refiere, quien se obliga no es el comitente, sino el comisionista á su propio nombre. ¿Quién desconoce esto? ¿Quién pretende lo contrario? Ya sea que se admita ó que se rechace la reforma, quedará establecido el mismo principio.

El que introduce ciertas mercaderías á la aduana, como consignatario, se hace deudor de los derechos fiscales, y esa deuda personal, existiría aunque desapareciesen las mercaderías.

Se argue que los opositores á la reforma, pretendemos establecer una novedad en jurisprudencia, haciendo que el fisco no tenga acción contra el consignatario. Esto no es exacto; como decía antes, reconocemos una deuda personal en el consignatario, y también real, gravando las mercaderías, pero sólo en lo referente á los derechos que ellas mismas han de devengar.

Ahora, pues, si nuestra legislación actual, siendo muy racional y equitativa, es además igual á la de Estados Unidos, si nuestra jurisprudencia armoniza perfectamente con la de aquella nación, ¿en qué se funda esta novedad de la reforma que se nos propone?

Se funda sencillamente en un interés puramente fiscal; se dice: porque así el fisco no perderá un peso de lo que se le adeuda. En cambio, se confiesa que muchas veces sucederá que el estado se pague con bienes ajenos, lo que es una injusticia que nosotros nunca debemos permitir.

La suprema corte de justicia, examinando ese interés, ha dicho con verdad, que es mal entendido, porque el verdadero interés del fisco está en aumentar el comercio, facilitando las transacciones y contratos mercantiles, por medio de una legislación liberal y protectora.

Establecida la reforma, nuestra legislación aduanera se desacreditaría en el exterior, pues se sabría que tenemos leyes por virtud de las cuales puede suceder muy bien, que un comerciante extranjeros que consigne á otro cualquiera que se halle entre nosotros, venga á perder sus mercaderías, haciéndolas servir el estado para pagarse deudas ajenas. Esto traería un daño de mucha más consideración, que la que importaría los beneficios que trata de hacerse al fisco con la reforma propuesta.

Por otra parte, señor presidente, por nuestra constitución, el principio de propiedad es sagrado é inviolable, y la reforma propuesta, de ninguna suerte puede armonizarse con ese principio, porque ella establece presuntivamente á favor del fisco,

ciertos hechos que muy bien pueden ser falsos, y que lo serán en muchos casos; y, sin embargo, sin admitir prueba de que lo son efectivamente, les atribuye tal fuerza, que en virtud de ellos priva á los dueños de su propiedad, para adjudicarla al fisco.

Decía, pues, que una institución que haga perder á cualquiera su propiedad, sin ningún hecho suyo, sin su consentimiento, es incompatible con el sagrado principio de la propiedad, y que bastaría esto para que fuese desechada la reforma.

Lo único racional es lo que existía en la legislación anterior.

Es justo que no se ponga al estado, cuando se trata de cobrar sus derechos, en el caso de comprobar á quién pertenecen las mercaderías que adeudan derechos: el que las introdujo ese es el dueño *prima facie*; pero, esto no impide el que cuando en realidad esto no sea así, pueda venir el dueño, deducir su acción, y comprobar sus derechos, para salvar su propiedad.

Si recorremos las diversas partes de nuestra legislación, encontraremos muchos casos análogos y que pueden suministrar luz sobre el particular.

Así, cuando un acreedor ejecuta á su deudor y se despacha contra él mandamiento de ejecución, no se le pone al primero en el caso de comprobar la propiedad del deudor, respecto á cada una de las cosas que posee; todo lo que se encuentra en su poder, se supone suyo, y se embarga provisoriamente; mas eso no quita que los que le han prestado alguna cosa, ó los que por cualquier título tienen alguna propiedad en su poder, aparezcan y lo comprueben legalmente; y entonces esos bienes se separan del embargo.

Lo mismo sucede, señor presidente, en el caso de una sucesión. No se pone al heredero en el caso de comprobar que todas y cada una de las cosas de que se encuentra en posesión su causante, le pertenecen: cuanto se halla en casa del finado se supone suyo; pero eso no priva de su derecho, á quien tuviese alguna cosa que le pertenezca, en la casa del finado; puede muy bien, como en el caso anterior, comprobar la prenda ó el préstamo, y entonces se separa y no entra en la sucesión.

Lo mismo sucede en una quiebra. Por lo pronto el juez sella la casa, presumiéndose que pertenece al fallido todo lo que se encuentra allí; pero esto absolutamente no quita á las personas que pudieran alegar dominio ó cualquier derecho real, en algunas cosas que vengan oportunamente á reclamarlas ante el juez, quien tiene el deber

de oírlos y respetar su derecho, acordándoles la preferencia que les corresponda.

Ahora bien, la consignación no es un contrato que de suyo hace perder la propiedad; el único efecto que tiene, es autorizar al consignatario, para que á nombre propio pueda enajenar las mercaderías consignadas; pero no le trasmite desde luego el dominio.

Esto se declara expresamente en el código de comercio, á propósito de las quiebras, porque después de hablar de las diferentes clases de acreedores, y de establecer los diversos privilegios, sentando la regla general de que el dueño es preferido á cualquier clase de acreedor, agrega:—Pertenecen á la clase de acreedores de dominio, los acreedores de objetos que el fallido tuviese á título de depósito, prenda, administración, arrendamiento, comodato, comisión de compra, venta, tránsito, entrega, ó cualquiera de los títulos que no transfieren el dominio.

Resulta de aquí, señor presidente, que una persona que ha consignado frutos ó mercaderías á otro comerciante, no por eso pierde desde luego su propiedad, sino que la conserva hasta tanto que el comisionista hubiese enajenado legalmente esos artículos.

Si antes de haber sucedido la enagenación, viniese al estado de insolvencia el comisionista, el que hubiese hecho la consignación puede reclamar su propiedad y separar sus efectos, reclamando la preferencia que corresponde al dueño.

Esto mismo debería suceder, pues, en el caso á que se refiere la reforma, porque es idéntico á los anteriores.

Está muy bien que al consignatario se presuma dueño de las mercaderías depositadas á su nombre; mas no por eso se ha de prohibir al verdadero dueño oponerse á que con ellas se paguen deudas del mismo consignatario insolvente, aun cuando sean á favor del fisco.

No hay ejemplo, señor presidente, recorriendo todas las partes de nuestra legislación, en que á un acreedor puramente personal, se le acuerde preferencia absoluta sobre la propiedad y el dominio. Esto, á mi juicio, sería completamente anómalo é insostenible; sin embargo, en virtud de la reforma eso sería lo que sucedería; el fisco, acreedor puramente personal, vendría á sobreponerse al verdadero dueño; el fisco diría: yo presumo dueño al consignatario y no quiero saber si lo es ó no en realidad; por más evidentes que sean las pruebas legales que se me ofrecen, no quiero examinarlas, lo único que me propongo es

pagarme lo que se me adeuda: esto sería, señor presidente, una iniquidad.

Se ha expuesto en la discusión, que nuestras leyes reconocen presunciones *juris et de jure*, es decir: que presumen en ciertos hechos, y además no admitían que se probasen que eran falsos. Es cierto, señor presidente, existen algunas de estas presunciones; pero, si bien se examina, se verá que las más de las veces ó casi siempre, ó la prueba es imposible, ó esas presunciones son la pena de un delito ó de la falta del cumplimiento de un deber.

Por ejemplo: el consignatario, cuando realiza alguna venta á plazo, por orden del comitente, debe prevenirlo inmediatamente, á quien ha vendido, los plazos y condiciones: no haciéndolo, es penado por medio de una presunción *juris et de jure*, de que la venta ha sido al contado, sin admitirle prueba en contrario, porque dejó de cumplir el expresado deber.

Así sucede también en las quiebras. El código de comercio impone á todos los comerciantes el deber de llevar libros; y si no los llevan, por más pura y honrada que haya sido la administración de los negocios, si quiebran son declarados fallidos fraudulentos, sin admitírseles prueba en contrario.

Puede ser que, en realidad, alguno no lo sea, es posible que no haya cometido un verdadero fraude, pero la ley le impone castigo como si lo hubiera cometido, porque faltó al deber que tenía, de llevar libros.

Así también en derecho penal, cuando se le prohíbe por el juez á un individuo, toda comunicación con una mujer casada, á petición de su marido, si después se le prueba la más pequeña relación, se le declara adúltero, y se le castiga como á tal, sin admitírsele prueba en contrario.

Tal vez sucediera que efectivamente no fuese delincuente, pero la ley le castiga porque faltó al mandato que se le impuso.

Tales son las presunciones *juris et de jure*: las leyes al presumir un hecho, teniéndolo además por evidente é incontrovertible, lo hacen en castigo de un delito; ó de la falta al cumplimiento de un deber, fuera de estos casos, si rechazan toda prueba en contrario, es que la consideran impracticable.

Pero yo pregunto: ¿cuál es el delito cometido por un comerciante extranjero, que envía sus mercaderías á un consignatario, celebrando un contrato perfectamente lícito? ¿A qué deberes ha faltado? ¿Por qué se tendría, en fin, por imposible, la prueba de su propiedad?

Si no ha cometido un delito, si no ha

faltado tampoco de ninguna suerte á su deber, ¿por qué se le penaría por medio de presunciones *juris et de jure*, arrebatándole su propiedad, muy fácil de justificarse, por lo demás?

Como antes lo expuse, sería ésta una institución que no tendría ejemplo, ni semejante en nuestro derecho, y diré más, ni en el derecho de ninguna nación civilizada, quizá.

Se ha pretendido que las naciones más civilizadas, tienen instituciones semejantes á esta: no puede ser, señor presidente, la civilización moderna se distingue de la antigua, en que va restringiendo cada vez más los odiosos privilegios fiscales.

En los tiempos remotos de la antigüedad, el estado y su representación, el fisco, lo eran todo, el individuo nada. La legislación moderna, más adelantada, respeta el derecho individual, y lo garante aún contra el fisco.

Mas, nosotros mismos, no hace mucho tiempo, reformando nuestra legislación, nos hemos dado un código civil sumamente adelantado. Pues bien, ese código, lejos de aumentar ó exagerar los privilegios fiscales, los ha reducido sobremanera. Ahora, pues, al sancionar otro código ó las ordenanzas de aduana, ¿vendremos á establecer principios contradictorios? ¿Nos dejaremos dirigir por un espíritu mezquino y puramente fiscal?

No, señor, por el contrario, debemos hacer, que todas las partes de la legislación armonicen, reinando en ella un mismo espíritu, y prosiguiendo los mismos propósitos.

No puede ser que estableciendo un nuevo código civil, los principios más adelantados, equitativos y liberales, las ordenanzas de aduana, revelen al contrario, un espíritu retrógrado y mezquino.

Votaré, pues, contra la reforma propuesta, concebida, á mi juicio, en vista solamente del interés fiscal mal calculado, y del todo separado de los principios de justicia.

**Sr. Argentó**—Para formar mi juicio, señor presidente, desearía que el señor miembro informante tuviera la bondad de explicar el verdadero sentido de este artículo que se discute, si sancionar esto en las ordenanzas de aduana, importa privar á un tercero de todo recurso para ser indemnizado ó para reivindicar, diremos así, su propiedad aún ante los tribunales ordinarios.

Yo comprendo, señor presidente, que cuando se trata de leyes administrativas, es necesario que la acción del gobierno y de la ley, sea prontá y eficaz, porque en este

caso el gobierno procede como soberano; pero esto no obsta á que en algunos casos también el gobierno, para no cometer una injusticia, pueda ser demandado, ó pueda tener intervención ante los tribunales ordinarios, en su carácter de persona jurídica.

Yo, señor presidente, para formar mi juicio, desearía saber cuál es la mente verdadera de este artículo, y según eso, he de estar ó no por él. Desearía que el señor miembro informante tuviera la bondad de darme estas explicaciones.

**Sr. Frías (U.)**—El artículo que está en discusión no puede ser más claro. Toda la discusión de ahora y de la sesión anterior, ha versado sobre este punto: es un privilegio ó preferencia que se acuerda al fisco sobre todos los demás acreedores. Eso es lo que quiere decir el artículo. Al que viene y deposita aquí las mercaderías, á ese, dice la aduana, lo considero dueño, y como dueño me paga todo lo que me debe.

Es claro que lo que sobre de esas mercaderías, cuando el consignatario haya quebrado, ó tenga que ir á un concurso ante los tribunales, el resto de esas mercaderías, digo, responde á los derechos de tercero.

Con este motivo, quiero hacer una pequeña rectificación á lo que ha dicho el señor senador por Córdoba.

La sentencia de la corte de los Estados Unidos, citada en la otra de la corte suprema de la república, según lo que en este momento acabo de ver, no está, á mi juicio, bien traducida, como está en la sentencia de nuestra corte. Aquí se usa de la palabra *privilegio*, cuando la corte de los Estados Unidos habla de *gravamen*, de *hipoteca* ó de cosa parecida.

Puedo mostrar al señor senador por Córdoba esa decisión, cuando salgamos de la sesión, para que vea que es cierto lo que asevero. Es todo lo que tengo que decir.

**Sr. Bazán**—Si me permite el señor senador, esos apuntes de que dió lectura, podremos aquí, leyéndolos nuevamente, verificar esta aseveración que hace.

**Sr. Argentó**—Había hecho una pregunta al señor miembro informante, para seguir con la palabra.

**Sr. Bazán**—Perdone, señor senador,

**Sr. Presidente**—Puede continuar con la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Argentó**—Señor presidente, en virtud de la contestación del señor miembro informante, parece que aquí se cierra la puerta al tercero, para poder hacer toda clase de reclamo ante los tribunales ordinarios.

En este terreno no puedo francamente

acompañar al señor senador miembro informante, porque comprendo que hay una verdadera injusticia en este caso.

Yo comprendo, señor presidente, que cuando se trata de la percepción de los impuestos, debe darse al gobierno una acción pronta y eficaz, y no se puede en este caso, admitir una prueba en contrario, porque esto vendría á demorar la percepción de ese mismo impuesto, y porque en ese caso, debe sobreponerse el interés público al interés particular.

Esta es, precisamente, la razón porque se establecen esos principios en la vida administrativa. Pero como ha dicho muy bien el señor senador por Córdoba, la legislación moderna trata de quitar todos esos privilegios del fisco; y si ahora establecemos el artículo como lo propone la comisión, vamos á retroceder inmediatamente en el sentido de esos principios, consignados en el código que nos rige.

Yo propondría un término medio, que creo conciliaría tal vez, la mente de los señores de la comisión, con el proyecto que ha presentado el honorable señor senador por La Rioja.

Yo estaría por el artículo, si se adicionase en el sentido de que, no se admitiese prueba en contrario, es decir, que se admitiese la presunción, *juris et de jure*, para lo que es la vía de apremio, por la cual se hacen efectivos los impuestos en la vía administrativa, pero sin que se considere como una presunción *juris*, simplemente, en cuanto á los derechos definitivos de un tercero, cuyos bienes se han enajenado para hacerse pagos de deudas ajenas.

Se puede, pues, establecer esto: sin que se admita prueba en contrario, en cuanto á la vía ó la acción administrativa, y sin perjuicio de los derechos del tercero, que podrá hacerlos valer oportunamente, ante los tribunales ordinarios.

De esta manera, creo que se conciliarían los verdaderos intereses del fisco, con la equidad y la justicia.

Así, pues, en el caso en que fuera rechazado el artículo de la comisión, y se tratara de la modificación propuesta por el honorable señor senador por La Rioja, yo en ese caso, propondría esta redacción, y si fuera aceptada, votaría en ese sentido.

**Sr. Bazán**—No voy á hacer un largo discurso, señor presidente, basta ya con lo dicho hasta aquí, para que el senado haya podido formar conciencia de la justicia y verdad que haya en las doctrinas que se han sostenido. Pero hay algo que no debo dejar en pie, y es la rectificación que el señor senador por Tucumán quiere hacer á

nuestra corte suprema, á propósito de las palabras que tomó en su sentencia, de la pronunciada por los Estados Unidos en la causa de Harris contra Dennié, y que parece que el señor senador tacha de no haberse vertido perfectamente en ellas el pensamienio de la sentencia de la corte de los Estados Unidos.

Esto, para mí no es exacto, y tratándose de una sentencia de esta corte, cuyas palabras pudieran admitir distintas interpretaciones, me parece que lo más seguro sería, en todo caso, antes de leerla en una traducción irreprochable por su exactitud, someterse con respecto á lo que diga de ella un tribunal tan serio, como la corte de nuestro país, tanto más en cuestión tan ruidosa como fué aquella en que pronunció nuestra corte su sentencia, donde consigna las referencias cuya fidelidad pone en duda el señor senador por Tucumán.

Pero desde que se pueden constatar ahora las palabras de esa sentencia, que son á las que ha aludido y leído el señor senador por Tucumán, veamos cómo leyendo nosotros esas mismas palabras, se confirman perfectamente las que antes he leído en la sentencia de la corte suprema de la República Argentina.

Estas son las palabras que ha traído traducidas el señor senador por Tucumán.

**Sr. Frías (U.)**—Esas son las de Fent, traducción de Carrasco Albano.

**Sr. Bazán**—Ah! de Carrasco Albano? pues, señor, yo tengo más fe y creo cien veces mejor que la traducción del señor Carrasco Albano, la que hizo nuestra corte, donde hay hombres muy eminentes y capaces, perfectamente conocedores del idioma inglés, y que juzgando un caso, si ha habido alguna dificultad para ellos en ciertas voces de la sentencia que traducían, han debido consultar personas más inteligentes que Carrasco Albano, para formar conciencia cierta del pensamiento de la corte de los Estados Unidos, sobre su sentencia. De consiguiente, antes de leer estos mismos apuntes que nos ha traído el señor senador, digo que ellos no merecen tanta fe, ni tienen tanta respetabilidad, como los que hallamos consignados en la sentencia de la corte suprema de nuestro país.

**Sr. Frías (U.)**—El señor Carrasco Albano es quien ha hecho esa traducción.

**Sr. Bazán**—Sí, pero me parece que entre la corte y Carrasco Albano, hay una diferencia como entre el cielo y la tierra. Dicen así los apuntes que ha traído el señor senador: «*Con respecto al derecho hipotecario fiscal del gobierno de los Estados Unidos, se sostuvo en la causa de*

*Harris contra Dennié, que el gobierno tenía un derecho hipotecario sobre las mercaderías importadas, para el pago de los derechos adeudados por éstas; es decir, por estas mercaderías importadas.*

**Sr. Frías (U.)**—Hipoteca, no privilegio.

**Sr. Bazán**—Fiscal. Y ya que hablamos de hipotecas, debo decir que en derecho no se conocen sino dos hipotecas: la convencional y la legal. La hipoteca legal, es aquí precisamente la fiscal, cuando se trata de las seguridades que se atribuyen al fisco; la hipoteca fiscal de que se habla en los apuntes del señor senador, es el privilegio fiscal, y vale tanto como la hipoteca legal que tenía antes, en nuestra legislación, la mujer casada para reclamar su dote, y las cantidades que llevaba al matrimonio, para cobrarlas con preferencia en los bienes del marido deudor.

Así, pues, no doy, ni se puede dar mayor importancia á esta distinción que se trata de hacer entre la hipoteca y derecho fiscal; no, señor, es lo mismo para este caso, aun concediendo que se acepte la traducción del señor Carrasco Albano.

Pero veamos lo que ésta dice: «*Con respecto al derecho hipotecario fiscal sobre estas mercaderías en la aduana, sostiene que el gobierno tenía un derecho hipotecario sobre las mercaderías importadas para el pago de los derechos adeudados por éstas; es decir, por estas mercaderías.*»

**Sr. Frías (U.)**—Siga adelante.

**Sr. Bazán**—(siguiendo) *Y no aseguradas por pagaré.* Es claro; es decir, el fisco todavía no ha convenido que salgan esas mercaderías, pero cuando consiente que salgan y tome el pagaré, entonces ya solo es deudor el firmante de ese pagaré, y el fiador, abonado; y no puede ya tener hipoteca, ni privilegio sobre las mercaderías que han pasado á distintos dueños, ó llevado otro destino.

«*Y que los Estados Unidos tenían derecho á la retención de las mercaderías, hasta que los derechos fuesen pagados ó asegurados.*» De esas mercaderías, es claro. Nadie ha de ir á la aduana á sacar al consumo, mercaderías que no hayan pagado derechos, y que estos derechos no estén asegurados por un pagaré.

«*Y que todo embargo de las mercaderías, por providencia de un estado, era nulo durante tal retención.*»

Es claro: si algún acreedor se hubiese presentado ante los tribunales, pidiendo un mandamiento de embargo sobre esas mercaderías que están en la aduana, ese embargo no vale, ni se le han de entregar

los efectos, hasta que no se pague los derechos. Pagados los derechos, entonces el interesado se los llevará.

«Por otra parte se sostuvo, continúa, que el gobierno no tiene derecho hipotecario fiscal sobre las mercaderías del introductor, por derechos que él adeudase sobre otras introducidas».

Exactamente lo que dice la sentencia de la corte, señor: que el fisco no tiene derecho para cobrarse, sobre mercaderías que están en la aduana, de derechos que deba el introductor por otras mercaderías introducidas anteriormente. Yo no sé, señor, cómo se leen estas cosas, y se hacen debates así!!

Francamente, me duele, señor presidente, que tratándose de principios tan claros y sagrados, como los que aquí se ventilan, yo no pueda tener la elocuencia y la autoridad necesarias, para llevar el convencimiento al espíritu de mis honorables colegas. Y que por esto se pierda tal vez la causa de la justicia y de la verdad, la causa de la civilización, porque tal reputo la doctrina que sostengo, y que discutimos ahora.

Hay algo más. Si llegara á pasar esta sanción inspirada, tal vez... iba á usar de una palabra inconveniente; pero debo decir que la reforma que se ha hecho en este artículo, echando por tierra todas las doctrinas de nuestra corte suprema de justicia, tiene sin duda origen en el señor doctor Francisco Pico, cuyo nombre se ve al pie del proyecto de reformas de la comisión nombrada por el poder ejecutivo, y es claro, que el derrotado en la ruidosa causa de don Manuel Ocampo contra el fisco, en que usó de una actitud tan inconveniente, arrojando el desprestigio y hasta el deshonor sobre nuestra corte, á quien la clasificaba de mercedora de ser llevada al banco de los acusados en el senado, qué otra cosa había de proponer que semejante reforma?

Pero sentiría, señor, que mis honorables colegas, haciendo á un lado las equitativas y justas doctrinas de la sentencia de nuestra suprema corte, acepten esa reforma á todas luces injusta y censurable, como lo he demostrado.

He concluido.

**Sr. Frías (U.)**—Voy á decir, señor, simplemente dos palabras.

El señor senador por La Rioja, á fuerza de elocuencia, quiere hacer triunfar su causa, presentando con colores distintos, cosas que son muy sencillas y muy claras.

Dije antes, que creía que había habido equivocación usando de la palabra *privilegio*.

gio, en la traducción de la sentencia de la corte de los Estados Unidos, citada en la corte suprema de la república, porque aquella corte había empleado la palabra *hipoteca* ú otra semejante.

Antes expuse, y el señor senador por Córdoba lo ha confirmado, que hay mucha diferencia entre el privilegio y la hipoteca, y es por eso que he dicho que en la sentencia de nuestra corte, se había empleado en la traducción una palabra que no era la misma que se había empleado por los Estados Unidos.

En cuanto á que la reforma que se propone sea un absurdo ó una cosa monstruosa, como se ha dicho, señor presidente, yo creo que es todo lo contrario: tal vez lo absurdo ó monstruoso, sería lo que quiere establecerse contra el fisco, colocándolo en peor condición que á los particulares, en sus contratos.

La reforma que ha propuesto la comisión de hacienda, ha sido proyectada por tres comisionados que son bien conocidos en el país: por el doctor Pico, cuyos conocimientos en jurisprudencia eran profundos, y por los señores Aguirre y Pedriel: el primero, administrador de rentas en esta ciudad, y el segundo, visitador de aduanas, cuya competencia en estas materias es indisputable, ha sido aprobada por el poder ejecutivo de la república y sancionada por la cámara de diputados, es también la ley vigente entre otros pueblos, en Francia y en Bélgica, naciones que, como todos saben, son de las más civilizadas del mundo.

¿Por qué se dice, entonces, que es monstruosa, que es violatoria del derecho de propiedad y que echa por tierra la constitución, una disposición que rige en los países que he citado, así como en el nuestro, que tiene el apoyo de hombres competentes, ha sido aprobada por el poder ejecutivo y está ya sancionada por una de las cámaras del congreso?

He concluído, señor presidente.

**Sr. Rocha**—Señor presidente: debo empezar por declarar que, en el primer momento, no le había dado á esta cuestión gran importancia; la creía simplemente una cuestión reglamentaria, y con la competencia que me hago un honor en reconocer en la comisión y en el señor senador por Tucumán, que ha manejado tanto tiempo aduanas, creí que tenía á su favor, la resolución propuesta, todas las condiciones de acierto que puedan buscarse en los negocios humanos. Pero, después que el debate se ha formulado, me he preocupado de la cuestión, y he visto que en ella están comprometidos los más graves prin-

cipios, que no se trata de una cuestión reglamentaria, sino de los más altos fundamentos del derecho; se trata de aquello que más estiman, no sólo las sociedades civilizadas, sino aún las sociedades bárbaras; se trata del respeto á la propiedad.

En su forma jurídica, puede decirse que esta cuestión se presenta así: se va á transformar una presunción *jure*, en una presunción *juris et de jure*.

Como yo no he estado en la parte anterior del debate, no sé si estoy repitiendo alguno de los argumentos hechos, y en este caso, pido perdón á mis honorables colegas.

Decía, pues, que se trata de convertir una presunción *jure*, que era lo que establecían las antiguas ordenanzas, en presunción *juris et de jure*. La presunción *juris et de jure*, es un principio de excepción que cada día desaparece, porque es establecer una presunción contra el hecho, que es un principio de carácter odioso, y debe por consecuencia, como he dicho, ante los principios de buena legislación, restringirse, hasta el punto de no aceptar sino aquellos casos donde es materialmente imposible que el hecho sustituya á la suposición.

Ahora bien, digo yo: en una cuestión de esta naturaleza, ¿cuáles son las razones que la comisión tiene para variar en esto la marcha regular del derecho, para afectar el principio sagrado de la propiedad? La comisión, indudablemente, se ha movido por un espíritu, que me hago un honor en reconocer, que es interesante para la comunidad, y es el de procurar que el fisco no sea defraudado de sus rentas. Pero es preciso que este deseo no nos lleve tan lejos, que olvidemos otro objeto más interesante para la sociedad.

Yo me explicaría, que en tiempo de Felipe II, cuando el fisco era una especie de maelstrón, que atraía hacia su seno á todos los desgraciados que tenían alguna relación con él, que bajo la forma de la gabela, bajo la forma de privilegio y bajo la forma odiosa de la confiscación, hacía desaparecer la propiedad privada, y entonces, invocando los principios que sirven á las recopiladas de base y de sustentáculo, se levantara el interés del fisco sobre todos los intereses; pero nosotros, en esta época y con nuestras instituciones, no podemos aceptar esa idea del fisco.

El fisco no es otra cosa sino la caja común, formada para atender á las atenciones comunes, y en esa caja no debemos desconocer jamás el sagrado principio de la propiedad, si no queremos lanzar á nues-

tra sociedad en una vía que ha quedado muy atrás, en la época moderna; si no queremos volver nuestro rostro hacia los tiempos pasados, en que la propiedad era generalmente desconocida por los gobiernos, y en que los principios del derecho eran sustituidos por la conveniencia, hasta el punto de que, nada se respetaba cuando aquel interés odioso que se llamaba razón de estado, se oponía á estos derechos que no pueden nunca desconocerse, porque son los primeros que tienen que establecerse y respetarse en todos los tiempos, el derecho de la propiedad, el derecho de la vida, en una palabra, el derecho en todas las aplicaciones que pueda tener. Decía que se ataca la propiedad; esto es indudable.

Nuestros códigos, tanto el civil como el comercial, establecen este principio inco movable, el único privilegio que existe, es el privilegio de dominio, y la reivindicación está arriba de todo derecho, de toda excepción.

Si esto pasa en materias civiles y comerciales en caso de cobro, si el que tiene derecho de reivindicación es el dueño de la cosa, si no está obligado á concurrir á la masa común de acreedores, ¿qué razón puede haber por parte del fisco, para establecer esta diferencia respecto de sus deudores, cuando, si bien es cierto que, aun cuando entre los deudores puede haber unos de mejor condición que otros, al fin todos son deudores y sólo el que tiene derecho á la reivindicación no cae bajo la clasificación de deudor, porque no ha hecho más que dar una comisión más ó menos importante, para que otro disponga de la cosa que tenga en su poder.

La adopción de este principio, responde á esta otra idea, que está en todas las cabezas, no solamente en los pueblos civilizados, sino en los pueblos bárbaros, que aquel á quien pertenece el dominio, es el dueño de la cosa cuyo dominio se le ha reconocido.

Es por esto que la reivindicación va tan lejos, que aun alcanza al derecho de reivindicar el precio de la cosa vendida.

Entonces, yo me digo: si este es el derecho para los particulares, ¿por qué queremos hacer un derecho especial para el fisco, en que se desconozcan absolutamente estos principios, cuando en general no está establecida la excepción en favor del fisco? Por otra parte, estos privilegios del fisco, que se invocan, no creo que estén en armonía con la índole de nuestras instituciones, ni que puedan considerarse subsistentes, porque entre nosotros no te-

nemos otros privilegios que los que están expresamente establecidos en las leyes.

En los demás casos, los privilegios son odiosos, y han desaparecido con todo ese bagaje de la antigua legislación, que ha quedado sustituida por nuestros códigos, que forman uno de los motivos de nuestro orgullo, por habernos equiparado á las naciones más civilizadas, en nuestra legislación.

¿Qué objeto se tendría en volver á aquellos tiempos, en desconocer nuestros propios principios, en desconocer el derecho de propiedad?

Se dice que es para garantizar al fisco de sus deudas; ¿se va, no sólo á reclamar contra el deudor, sino que se va á reclamar contra una tercera persona, que no tiene nada que ver con el fisco en este caso?

Es necesario no olvidar, que estas deudas provienen de dos causas: primera, que en la aduana no se ha tenido el cuidado suficiente en la elección del fiador que firma la letra; y la otra, en creer que un hombre, que ha sido respetado hasta entonces, como un hombre digno, no pueda dejar de ser un hombre digno y cometer una verdadera indignidad, sustrayendo los bienes con que debiera pagar sus deudas. Entonces, pues, es para evitar estas dos eventualidades, que para honor de la especie humana, principalmente esta última, es una verdadera excepción, se ha establecido el principio que he mencionado. Y ¿vamos á quebrantar este principio, reconocido por todos, para que en nombre de la excepción del delito vayamos á quitar la garantía á la propiedad, y aún puede decirse, á la libertad?

¿Es posible sostener, señor presidente, que porque se cometa un delito, porque se cometa un abuso, se debe quebrantar el principio que da lugar á cometer ese abuso ó ese delito?

Los ilustrados señores senadores que forman parte de la comisión, fueron tan lejos en la aplicación de esa doctrina, que han creído que todo abuso y todo delito, justifica la supresión del principio que pudiera dar lugar á esos abusos y esos delitos.

Entonces, señor, ¿qué triste sería la condición del pueblo! ¿Qué sería de esta libertad tan querida, ya sea cuando se coloca bajo el punto de vista político, ya sea cuando se coloca bajo el punto de vista individual? ¿Qué sería de esta libertad que eleva el carácter humano?

Desaparecería completamente, porque el abuso y el delito están siempre detrás de la libertad.

Se ha traído el recuerdo de la causa seguida por el señor Pico. Yo les pido á mis distinguidos colegas que sostienen la opinión contraria, que recuerden bien los antecedentes de esa causa.

En el primer tiempo, el señor Pico no sostuvo que debían embargarse las mercaderías posteriores, en razón de que éstas estaban afectas al pago de derechos adeudados por otras mercaderías consignadas al mismo consignatario; lo que sostuvo fué, que no se había probado suficientemente la época de la deuda del consignatario, ni se había probado el derecho de la reivindicación. Fué precisamente en el último escrito, cuando el debate había acalorado al señor procurador general, cuando era natural que una vez que se había desviado en un punto de lógica, se desviase en los demás, fué entonces, si no recuerdo mal, que el señor procurador sostuvo claramente, que las mercaderías, por regla general, que fuesen después consignadas á un consignatario deudor del fisco, estaban afectadas al pago de los derechos, aunque se probase que pertenecían á otro dueño.

Esto muestra, pues, que estos antecedentes que se han traído al debate, no tienen gran fuerza; y sobre todo, no obstante que yo participo de la misma opinión de mi distinguido colega el señor senador que habló antes, respecto á la jurisprudencia establecida por los Estados Unidos en el caso de Dennié, yo creo que esta cuestión está regida por principios que no se pueden desconocer, y que se reducen, lisa y llanamente, á esta forma: el individuo dueño de una mercadería que no tiene ninguna clase de deuda con el fisco, no puede estar obligado á pagar las deudas de otro individuo, con el cual no tiene relaciones de derecho, ó que aun cuando las haya tenido antes, éstas habían desaparecido y recién principia á reanudarlas.

Esta no es cuestión de derecho; esta es cuestión de buen sentido, regida por el principio fundamental, de que nadie responde sino de sus propias deudas, que nadie tiene derecho de responder por un tercero. Y ¿por qué se ha de venir á hacer esto? Porque puede tener lugar el caso de que un consignatario infiel, busque los medios de que las mercaderías que estaban en la aduana y que eran en realidad de él, las haga aparecer como que son de otro. Entonces, ¿dónde vamos á parar? Quitemos la garantía del dominio, quitemos las tercerías, quitemos todos los demás derechos; pero yo no pienso como los señores senadores, que se debe hacer

mejor lugar al fisco que á los demás interesados que se encuentran en el caso de reclamar sus derechos. Creo, por el contrario, que deben igualarse los derechos en este caso. Si las mercaderías no pertenecen al deudor, si se prueba que pertenecen á una tercera persona, ¿cómo se puede exigir que esta tercera persona pague los derechos adeudados por el consignatario?

No, señor; y esto me parece que es tan claro, que no necesito esforzarme mucho para demostrar que no puede aceptarse una modificación que viene á afectar profundamente la propiedad, que viene á establecer el impuesto en una forma inconveniente, á tomarlo de quien tiene con que pagarlo, aunque no sea quien lo debe.

No, señor, este principio no puede sostenerse por ninguna nación que se rija por principios liberales.

Por otra parte, el interés del fisco no puede colocarse arriba de los principios del derecho y de la justicia. Es conveniente que el fisco pierda lo menos que sea posible; pero no es lícito apelar á la confiscación, para que no pierda el fisco, ó para que estén llenas las cajas fiscales, cuyo objeto podría conseguirse por otros medios de que echan mano los pueblos bien administrados. Sería preferible el recargo de impuestos que gravasen con igualdad á todos los individuos que forman parte de la sociedad; porque entonces, ese impuesto no sería odioso, porque no vendría á recaer únicamente en unos pocos individuos, que no pertenecen siquiera á la sociedad en cuyo favor se establece ese impuesto, pues vendrían á pagarlo los extranjeros que depositaran alguna confianza en el comercio del país.

¿Y cuál sería el resultado de la adopción de un sistema tan odioso? El resultado sería desacreditarnos, pues bastaba que dos ó tres individuos hubiesen quebrado ó suspendido pagos, adeudando derechos al fisco, para que la aduana se apoderara de las mercaderías depositadas á su nombre y las vendiera, aun cuando se probase que pertenecían á un tercero, para hacer efectivo el pago de los derechos fiscales. Entonces, todo el comercio de importación tendría mucho cuidado de mandar sus mercaderías aquí, y es posible que concluyese por no enviarlas, por no verse expuesto á esa grave contingencia, además de las contingencias de otro género á que esas mercaderías están expuestas. Esto haría completamente ilusoria la posibilidad de obtener ninguna ganancia. Yo digo que, mirando la cuestión bajo el punto de

vista práctico, conviene que nosotros levantemos nuestro crédito en el exterior, en los países de donde recibimos la importación. Téngase en cuenta que nos hallamos en un mal momento, y que hoy es más necesario que nunca levantar nuestro crédito, aun cuando tuviéramos que dejar de percibir una parte de esos derechos.

No nos olvidemos que el crédito es una gran fuerza moral, y que cuando ésta no se tiene, son inútiles todas las demás fuerzas materiales. De otra manera, nuestros amigos en el extranjero, podrían aplicarnos con razón aquellos grandes consejos de Franklin, cuando gestionaba los intereses de sus conciudadanos en Inglaterra.

« Es necesario que ustedes nos ayuden, « no sólo haciendo lo posible porque el « odio de este pueblo desaparezca, sino « fortaleciendo á sus amigos por vuestra « buena conducta, y no dando motivo ni « ocasión á vuestros enemigos, para que á « cada momento puedan fulminar cargos « contra el proceder de ustedes. Es únicamente observando esta conducta, que « ustedes pueden encontrar un apoyo leal « y sincero, porque entonces sus enemigos « no encontrarán los medios de hacer que « las voces calumniosas que se levantan « contra ustedes, sean creídas por los que « son extraños á estos negocios».

En la situación en que hoy nos encontramos, son perfectamente aplicables aquellos consejos. Estamos descreditados en Europa, por los malos tiempos que pasamos; los intereses heridos por estas dificultades, ofuscados ó ciegos, consultando únicamente sus conveniencias, interpretan estos actos de una manera dudosa en daño nuestro; y cuando vean que el congreso argentino ha convertido en ley ese principio,—que yo no he visto establecido en ninguna parte, como lo afirma el señor senador por Tucumán, cuya opinión respeto, á pesar de que he estudiado mucho esta materia,—de que no hay reivindicación contra los derechos fiscales, entonces nuestro descrédito será mayor, porque se creará que hemos perdido completamente la cabeza y que hemos arruinado á la nación, violando los principios más fundamentales del derecho y contribuyendo á su completo descrédito.

**Sr. Bustamante**—No puedo contestar al discurso del señor senador que deja la palabra, ni al anterior del senador por Córdoba. Ambos son abogados, y nos han hablado de los principios del derecho civil y comercial, que rigen en éste y en otros países; pero la legislación aduanera

es completamente diferente á las reglas de la legislación común.

Tratándose de aduanas y de la percepción de los impuestos fiscales, no hay sino dos principios: ó se concede crédito al comercio, ó no se le concede.

En los pueblos donde el comercio tiene crédito, se ha aceptado el principio establecido en nuestras ordenanzas, respecto de las consignaciones; es decir, que el que deposita las mercaderías en la aduana, es el propietario de ellas. Por consecuencia, ese individuo tiene derecho de sacarlas firmando letras á cuatro ó seis meses, para el pago de los derechos del fisco.

En los pueblos donde no se admite este sistema, donde el comercio no goza de crédito, los derechos se pagan al contado, y en ellos no existe esta prescripción, porque es completamente inútil.

Según nuestra legislación aduanera, concediendo crédito al comercio, el comerciante que deposita mercaderías en la aduana, las saca firmando letras á plazos determinados y dando un fiador.

Pero la aduana, para aceptar este fiador, no va á buscar á los hombres que tienen fincas ó estancias en el país, va á buscar en los libros, quién tiene mercaderías en depósito, y ese es el fiador. ¿Por qué? Porque está reconocido en nuestra legislación, que el tenedor de mercaderías en depósito, es el dueño, y con ellas ha de responder al pago del impuesto de las mercaderías que ha sacado.

Pero se dice: los mercaderías no pueden responder sino por sus propios derechos. Pero las mercaderías que se sacan del depósito, y por las cuales firma una letra el consignatario, ¿cómo van á responder por los derechos, cuando ellas están ya fuera de la aduana? Así es que las que quedan responden. ¿Por qué? Porque quizá puedan ser transferidas á un tercero, siendo del mismo individuo que ha firmado la letra; y sin embargo, cuando venga el caso de pagar esa letra, aparezca ese tercero, ese otro dueño de esas mercaderías que están en depósito y queda burlado el fisco.

Así, pues, señor presidente, si no se acepta en nuestra legislación aduanera, que el consignatario de mercaderías en depósito sea el dueño para ante la aduana, es preciso cambiar completamente de sistema; es preciso que no se acuerde crédito al comercio, y que las mercaderías paguen su derechos, al extraerse de la aduana, y entonces no habrá cuestión. Yo digo: nosotros tenemos el sistema de acordar crédito al comercio haciéndole firmar letras á pla-

zo. ¿por qué? Porque ha sido depositada la mercadería á nombre de tal individuo y ese responde de los derechos; y así debe ser, porque la mercadería que sale de la aduana, esa ya no vuelve, ni se puede perseguir en los almacenes en que se encuentre.

Es esto lo que quería agregar, á lo expuesto por el señor senador por Tucumán.

Por lo demás, esta es la ley vigente en Francia, en Inglaterra, en Bélgica y creo que en Estados Unidos también, que están más adelantados que nosotros y no se han quedado en la época de Felipe II.

**Sr. Cortés**—Oigo repetir, señor presidente, con demasiada frecuencia, á los señores senadores que proponen la reforma, que esta, es la ley vigente en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos.

Como se ha demostrado hasta la evidencia, que no es exacto que tal institución rija en Estados Unidos, sucediendo lo contrario, pues la jurisprudencia que rige allí, es la que ha establecido nuestra suprema corte: yo me permito dudar que tal disposición pueda existir en las demás naciones que se citan, ni en parte alguna de la tierra. Por que es abiertamente contraria á los principios en que se basa el derecho de propiedad, y en mi concepto, no hay ejemplo de legislación alguna, que haga de inferior condición al propietario de un objeto determinado que al mero acreedor, por más privilegiado que se quiera suponer.

Como ha dicho muy bien el señor senador por La Rioja, la tal reforma carece enteramente de antecedentes.

Yo recorro todas las partes de nuestra legislación, y en ninguna hallo nada que se parezca á la disposición que se quiere establecer: el derecho de propiedad es un derecho absoluto sobre la cosa, y se dá contra cualquier persona, excluyendo á todas; de manera, que el dueño de un objeto, mientras no haya sido legalmente enajenado, lo recobra donde quiera que lo encuentra y puede reclamarlo, aún de personas con quienes nunca haya contratado.

Así es, que yo, francamente, no admito que lo contrario pueda hallarse establecido en Francia, Inglaterra, ni en ninguna otra parte; inclinándome á creer más bien, que esta suposición se funde solamente en algunos textos aislados, mal interpretados, ó aplicados de un modo inconveniente, como ha sucedido,—tratándose de la jurisprudencia de Estados Unidos.

Se dice que las ordenanzas de aduana contienen legislación especialísima, y se observa también, que no todos los códigos

están calcados sobre los mismos principios.

Verdad es, que los diversos códigos, como el civil y el de comercio, por ejemplo, contienen ciertas especialidades y discrepan en algunas disposiciones; mas, esto sólo sucede en los principios de un orden secundario, y de ninguna suerte en los que se pueden considerar fundamentales, como el de propiedad, los cuales son comunes á todos ellos; variando en realidad, menos que en los principios mismos, en la manera de aplicarlos.

No hay código que no conozca el principio de propiedad, ni puede hacerlo; y si lo hubiera, no merecería el nombre de código, pues todos los que se conocen, garantizan y respetan la propiedad, que es un derecho natural y base del orden social.

Por lo que respecta á los nuestros, debiendo todos ellos conformarse con la constitución, que es la ley fundamental, derivando sus disposiciones de los principios sentados en ésta, ella declara la propiedad sagrada é inviolable.

**Sr. Oroño**—Ha sido tan extensamente discutido este asunto, y, sobre todo, tan luminosamente refutado por los señores senadores que hacen oposición al artículo propuesto por la comisión, que sería una vana pretensión de mi parte, el proponer seguirlos en el terreno en que se han colocado, remontándose en las regiones del derecho, sobre el cual, me parece no han dejado absolutamente nada que decir, ni ningún argumento que oponer.

Por consiguiente, señor presidente, al tomar la palabra, tengo por objeto expresar el motivo de mi voto negativo al artículo que propone la comisión, estando de perfecto acuerdo con los señores senadores que se oponen á él.

En la vida agitada porque hemos pasado, señor presidente, han llegado á tal punto los abusos del poder, que se ha convertido en medio ó resorte de gobiernos, en algunas partes, el despojo y la injusticia, lo que se comprende perfectamente bien por la exaltación de las pasiones, en algunos casos, ó por la estrechez de propósitos en que los partidos se han encontrado más de una vez. Pero en una ley, que debe ser la expresión de la tranquilidad y meditación del legislador, no se concibe que puedan consignarse principios que entrañen el despojo de la propiedad, que entrañen una violación flagrante de la constitución, lo que no puede en manera alguna aceptarse por nadie.

El señor senador por Jujuy decía, para probar ó justificar la proposición que ha

hecho la comisión de que forma parte, que la aduana acuerda generalmente el plazo de tres meses á las personas que tienen mercaderías depositadas, haciéndoles firmar letras por el valor de los impuestos.

No es exacto, señor presidente, que la aduana acuerde ese crédito ó ese beneficio, sólo á los que tienen mercaderías depositadas, sino á todos los comerciantes que estén en capacidad de pagar.

¿Qué es lo que constituye el crédito, señor presidente? El crédito no es otra cosa que la voluntad de pagar y la capacidad de pagar: cualquiera persona que se encuentre en estas condiciones, puede ser admitido como fiador en la aduana. El señor senador por Tucumán, ha sido como yo, administrador de aduana, y me parece que no puede haber olvidado que en la oficina, al frente mismo de la silla en que se sienta el administrador, existe la lista de las personas que pueden ser fiadores para el pago de mercaderías, y que no se hace distinción entre los que tienen mercaderías en depósito, y los que no las tienen, sino que sólo se averigua si es comerciante, y si tiene crédito, tenga ó no mercaderías en la aduana. Y si no se procediera así, ¿qué resultaría? Resultaría una desigualdad evidentemente chocante, porque al mismo tiempo que se exige á un consignatario la responsabilidad del pago del impuesto, por mercaderías de otro individuo que aquel que ha devengado derechos, en otro caso, cuando la introducción se hace directamente, como dueño, que paga en la misma forma, en documentos ó pagarés, garantidos por otra persona, se le acuerda la misma consideración. ¿Á quién se iría á cobrar en este caso, si este individuo que había hecho directamente la introducción, que no la había hecho por cuenta de otro, y cuyas mercaderías habían sido trasladadas á otro punto, que tal vez habían sido vendidas ya, no pagase la letra que había firmado en la aduana? ¿Se procedería contra la mercadería? No; se procedería contra el deudor, contra sus bienes, cualquiera que fuese su naturaleza; porque no podría irse contra la mercadería que había sido despachada.

Se ve, pues, que el fundamento de esta disposición, no lleva por fin la existencia de las mercaderías en depósito, lleva por fin la capacidad y voluntad de pagar, es decir, el crédito del que afianza la mercadería ó del que la introduce.

Estas son, señor presidente, las razones porque he de votar en contra del dictamen de la comisión, y por lo que pido se consigne mi voto,

**Sr. Corvalán**—En un cuarto intermedio pueden ver los señores senadores, las ordenanzas aduaneras de Francia y Bélgica, y allí ver la conformidad de esas disposiciones con el artículo que propone la comisión. Puesto que se han manifestado dudas al respecto, sería bueno constatar el hecho.

**Sr. Oroño**—Me permite una interrupción, señor senador?

Yo creo que lo único que debemos hacer, señor presidente, es examinar la conformidad de las ordenanzas aduaneras de los Estados Unidos, con el artículo que propone la comisión; porque las de Francia, España y Alemania, no pueden servirnos de criterio. Nuestros principios de gobierno son completamente...

**Sr. Cortés**—Yo debo decir, contestando al señor senador, que nunca he dudado que se puedan presentar tales ó cuales datos, tomados de Francia ó Bélgica, como se han presentado, muchas veces, de la legislación de Estados Unidos, pero que son necesariamente mal interpretados. Y no puede ser de otra manera, porque no es aceptable, que naciones que tanto respetan el derecho de propiedad, vengan á estrellarse contra él.

**Sr. Presidente**—Invito á los señores senadores, á pasar á cuarto intermedio.

—Se pasó á cuarto intermedio. Vuelven los señores senadores á sus asientos, continuó la sesión.

**Sr. Gelabert**—Voy á pedir una corta explicación al señor miembro informante.

No he comprendido bien, si las facturas de removido, ó sin recargo de derechos, que tienen que pasar de un punto á otro—de los puntos del litoral, con destino á puntos centrales—por el hecho de llegar á un punto del litoral, á cargo de un consignatario ó agente comercial, el cual las recibe y remite á su destino, por el hecho de encontrarse en ese momento, tal agente comercial, comprometido á pagar letras vendidas, puede la aduana echarse sobre esas facturas, para pagarse sus derechos?

**Sr. Frías (U.)**—Yo creo, como toda la comisión, que las mercaderías que se llevan de un punto á otro, de removido, no están comprendidas en este artículo, porque esas mercaderías han pagado derechos, y ya con ellas nada tiene que hacer el fisco.

**Sr. Gelabert**—Pido entonces, que se consigne ese concepto en el acta y así votaré con los señores de la comisión. Creo que el fisco debe hacerse pago, y no es

posible que los efectos que se introducen en una plaza, bajo las garantías de un individuo, que tal vez son á distintas consignaciones, pueden responder al pago de derechos, puesto que pueden esas personas encontrarse insolventes cuando llegue el caso de ejecutar el pago. De lo contrario, sería dejar al poder ejecutivo un semillero de pleitos interminables, para hacerse pago de las deudas fiscales.

**Sr. Rocha**—Por las palabras del señor senador por Corrientes, deduzco que ha entendido mal el espíritu del artículo. Nosotros sólo pretendemos lo siguiente, sobre lo que deseo que el señor senador se fije con especialidad: que las mercaderías de un tercero, que vienen á la aduana, con posterioridad á la deuda contraída, no sufran la deuda de otro tercero; por consiguiente, si el señor senador vota por el proyecto de la comisión, va á votar esto: que el tercer dueño de las mercaderías, que no adeuda nada á la aduana, va á pagar la deuda que un tercero adeuda á la aduana. Esto es en resumen.

**Sr. Gelabert**—Al ser llevadas de otro punto.

El señor senador por Córdoba, decía que donde quiera que se encontrase la propiedad, se haría el reclamo; no es posible, porque el consignatario que recibe los efectos de otro punto, no es el responsable, para ante el fisco, sino el que los afianzó en la aduana; de otro modo, el fisco no tendría garantía ninguna, porque no podría reclamar contra el comerciante A. ó B. que los compró, sino contra el consignatario, que es para la aduana el verdadero dueño de esos efectos.

**Sr. Bazán**—Como fundamento de las palabras que acaba de decir el señor senador por Buenos Aires, pediría que se lea el artículo, tal como lo propone la comisión, y se verá por esa lectura, señor presidente, que las mercaderías que se hallen en la aduana, por comisión ó transferencia, se consideran del deudor, en cualquier fecha en que se hallen, y nadie, pues, que hubiera pagado ya derechos ó no: dice *que se hallen en la aduana á nombre del deudor*. Y de esas mercaderías que han pagado derechos en la aduana de Buenos Aires, y que fueran remitidas á Córdoba ó á Santiago del Estero, consignadas á un individuo deudor del fisco en la plaza del Rosario, se apodera éste y se hace pago de la deuda de aquél.

Siento que el señor senador por Corrientes no atienda á estas palabras que digo, que á él iban dirigidas.

**Sr. Gelabert**—Estaba atendiendo.

**Sr. Bazán**—He concluido.

**Sr. Presidente**—Se va á votar si el punto está suficientemente discutido.

—Votado, resultó afirmativa en general.

**Sr. Presidente**—Va á leer el señor secretario el artículo 171, para votarse.

—Votado, resultó negativa de 11 votos contra 10.

**Sr. Presidente**—Ahora corresponde que la cámara resuelva si el artículo propuesto por el señor senador por La Rioja, debe ser tomado en consideración inmediatamente.

**Sr. Rocha**—Como no había más que la modificación introducida, me parece que el artículo queda subsistente como está.

**Sr. Presidente**—El señor senador propuso un nuevo artículo, y con arreglo al reglamento, la cámara debe decidir, si se toma inmediatamente en consideración.

Se va á votar...

**Sr. Bazán**—Retiro esa modificación; que quede ese artículo tal como estaba antes, en la ordenanza vigente.

**Sr. Oroño**—Yo haría moción para que pasásemos á cuarto intermedio, á fin de ponernos de acuerdo sobre el artículo con que se ha de sustituir.

**Varios señores senadores**—Perfectamente.

—Se pasó á cuarto intermedio

—Vueltos á sus asientos los señores senadores, dijo el

**Sr. Presidente**—Continúa la sesión.

**Sr. Bazán**—Para conciliar, señor presidente, cierta divergencia de opiniones que había entre los que hemos sostenido que deben admitirse pruebas en contrario, en caso del artículo en discusión, cuando se trata de los derechos de tercero, hemos acordado una redacción que se halla, hasta cierto punto, de acuerdo con nuestra opinión, y que pido al señor secretario se sirva leer, en los términos que ha quedado el artículo. (Se leyó).

Es en estos términos, señor presidente, en los que ha quedado reducida la primera modificación que hemos introducido, términos que comprenden en el fondo el pensamiento que he sostenido, y con el cual estoy de acuerdo.

Debo, sin embargo, ya que se trata de esto, dar ciertas explicaciones personales, por las palabras que expuse después de

la votación, pidiendo el retiro de aquella modificación; era que, señor presidente, dada la dificultad, diré así, que había para la adopción franca del pensamiento que sostenía, temía que pudiera ser rechazada mi modificación y prefería, antes que esto sucediese, que quedara subsistente la doctrina de la suprema corte, manteniendo el artículo de las ordenanzas, tal como estaba y ella lo interpretó; pero es fuera de duda, que mucho mejor sería aclarar esa disposición, consignando el principio que felizmente ha triunfado en esta cámara, en los términos que he dicho antes, hemos acordado votar el artículo.

He dicho.

—No haciéndose uso de la palabra, se votó el artículo 171, en estos términos:

« Se entenderán ser del deudor ó del fiador, todas las mercaderías que estuviesen en la aduana por consignación ó transferencia, salvo los derechos de ter-cero ».

**Sr. Vallejo**—Pido que se divida la votación en dos partes: la primera hasta la palabra *salvo*, y la segunda el resto del artículo.

**Sr. Presidente**—Bien, se va á votar hasta la palabra *salvo*, como ha indicado el señor senador.

—Votado, resultó afirmativa.

**Sr. Presidente**—Se va á votar el resto del artículo.

—Votado, resultó afirmativa.

**Sr. Secretario**—Agregar el siguiente artículo con el número 240.....

**Sr. Bazán**—Antes que se dé lectura de ese artículo, quiero proponer el restablecimiento de un artículo suprimido por la comisión reformadora y adoptado por la comisión de hacienda del senado, que creo debe ocupar el número correspondiente en la ordenanza vigente.

Encuentro, señor presidente, en las ordenanzas vigentes á que me refiero, los artículos 194 y 195, que dicen:

« El interesado podrá pagar los derechos en cualquiera de las monedas metálicas que establece la ley de octubre de 1863, y en papel moneda de Buenos Aires, calculado por su valor equivalente ».

El otro artículo dice:

« La tesorería de la aduana de la capital, recibirá diariamente de la contaduría nacional, el tipo que haya de servirle

« para las reducciones de metálico á papel ».

Bien, señor presidente, veo que el primer artículo está, más ó menos, en los términos del que he leído yo y que está vigente en las ordenanzas de aduana. El, pues, debería recibir una modificación y es la que se relaciona con la ley sancionada por el congreso, actualmente en vigencia, que no es ciertamente ya, la de octubre de 1863, sino aquella que sancionó el congreso, sobre moneda, hace dos años.

Sancionado ese artículo, con la modificación que indico, le viene su oportunidad al 195, á que antes me he referido, y que dice que la tesorería de la aduana de la capital, recibirá diariamente de la contaduría nacional, el tipo que haya de servirle para las reducciones de metálico á papel.

En el artículo propuesto por la comisión reformadora, sólo se expresa que puede recibirse el papel moneda de Buenos Aires; por su valor equivalente.

Esta modificación, fué propuesta en tiempo en que el papel moneda de Buenos Aires tenía un tipo fijo en el banco de la provincia, ó mejor dicho, en la oficina de cambio, donde por veinticinco pesos moneda corriente de Buenos Aires, se recibía un peso fuerte. Por consecuencia, era natural que creyéndose que esto era un hecho normal, la comisión reformadora, al encontrarse con este artículo de las ordenanzas vigentes, que resuelve diariamente el tipo que haya de servirle para las reducciones de metálico á papel, lo creyese inútil, puesto que ese tipo estaba fijado de una manera permanente; pero hoy el papel moneda ha vuelto á su antiguo valor: éste no se cotiza á un precio fijo.

Creo, pues, que no podemos nosotros prescindir de darle la colocación que tenía en las ordenanzas vigentes. La conveniencia que hay para esto, es palmaria y manifiesta.

Este artículo fué propuesto por los señores senadores de la comisión de hacienda, quienes colaboraron este proyecto de ordenanzas, y me parece que no habrá dificultad en que acepten lo mismo que creyeron conveniente cuando se sancionaron dichas ordenanzas.

He dicho que es indispensable sancionar este artículo, porque sucede en la actualidad, que el gobierno nacional, desatendiendo las prescripciones de este artículo, que no ha sido abolido por ninguna ley del congreso, ha fijado un tipo al papel moneda de Buenos Aires, que no es evidentemente el corriente en plaza ¿Y qué

sucede con tal motivo? Que todas las obligaciones del gobierno nacional, sea para con sus empleados, sea para con aquellos individuos con quienes ha contratado primero y á quienes debe una cantidad determinada de pesos, cuando va á hacer el pago en tesorería, se encuentran defraudados de un 5 ó 6 %, si se recibe el papel de la provincia al tipo oficial, que si se recibe papel del banco nacional; entonces la diferencia es mucho mayor: es de un 15 ó 16 %.

Yo digo que no hay derecho para que el gobierno nacional pueda en ningún caso, defraudar á sus acreedores legítimos, de las cantidades que deba darles, sea en cumplimiento de leyes del congreso, sea en cumplimiento de los contratos que haya celebrado con ellos.

Hay algo más, señor, de censurable en esta manera de percibir la renta, y es que mientras que en Buenos Aires los introductores de mercaderías, que van á consumirse en plaza, pagan los derechos de aduana con una diferencia de un 5 ó un 6 %, ó mejor dicho, de un 15 ó un 16 %, porque es claro que no ha de haber introductor que prefiera pagar con moneda de la provincia de Buenos Aires, cuando pueda pagar con la del banco nacional, que tiene una depreciación mucho mayor, digo, pues, que cobrándose en esta moneda y al tipo oficial que le ha fijado el poder ejecutivo, viene á defraudarse á la renta de un 15 ó 16 %, estableciendo de esta manera y de un modo indirecto, un derecho diferencial para aquellos introductores por las aduanas terrestres, donde no circula papel moneda de Buenos Aires, quienes pagan en moneda metálica del tipo fijado por la ley.

Estas consideraciones que expongo, señor presidente, las creo tan justas, que no pueden menos de inducir á los señores miembros de la comisión, á aceptar el restablecimiento del artículo suprimido, por las causas que he indicado.

**Sr. Bustamante**—Evidentemente, señor presidente, que ese artículo ha sido suprimido por la comisión reformadora de las ordenanzas, en el año pasado, cuando el papel moneda de la provincia de Buenos Aires tenía un valor fijo en la oficina de cambio. Es por eso también, que el artículo que queda subsistente, se refería á la ley del año 63, cuando había otra del año 65, del congreso, sobre moneda.

Mi juicio, al respecto, no obstante que este nuevo proyecto de ordenanzas está sancionado ya por la cámara de diputados, es que ni uno ni otro corresponden propiamente á la ordenanza de aduana.

Todos los años, en la ley de aduana se dice: estos impuestos podrán ser pagados en moneda metálica reconocida por la ley, así como en billetes del banco de la provincia, en billetes del banco nacional, en papel moneda de la provincia. Por consiguiente, no tiene por qué figurar en nada en esta ley; y lo mejor sería suprimir de ella el suprimido ya por la comisión y el otro que ha leído el señor secretario; porque, como repito, no tiene nada que hacer la manera cómo se ha de recibir el papel, y agregaré que solo se refiere al papel y no á los billetes del banco de la provincia, ni á los billetes del banco nacional; sólo se refiere el artículo al papel moneda, porque entonces no había otro papel.

Sería mejor, pues, eliminar de aquí este artículo y dejar que la ley de aduana establezca en qué clase de moneda se han de pagar los derechos, y si la fijación del tipo se ha de hacer diariamente, semanalmente ó mensualmente. El poder ejecutivo al disponer que fuese mensualmente, no tuvo en cuenta la ley del año 63. Indudablemente, no le ocurrió, como no le habría ocurrido á nadie, que en estas ordenanzas de aduana hubiese tal disposición al respecto.

Agregaré, señor presidente, que en la cámara de diputados hay un proyecto, presentado ya por uno de sus miembros, para que esta fijación no se haga cada mes, ni cada día, sino cada semana; así es que vendríamos á sancionar aquí, que esto se haga cada día, cuando allí se sanciona que se haga cada semana.

Por estas razones,—yo no sé lo que piensan los demás miembros de la comisión estoy porque se elimine de estas ordenanzas, este artículo y el otro que el señor senador quiere introducir.

**Sr. Presidente**—Para poner á discusión el artículo que ha propuesto el señor senador por La Rioja, necesito saber si tiene el apoyo de la cámara.

**Varios señores senadores**—Apoyado.

**Sr. Presidente**—Está en discusión.

**Sr. Bazán**—Señor presidente: las razones que ha expuesto el señor senador, miembro de la comisión, que me ha precedido en la palabra, francamente no me convencen, porque no las creo bastante fundadas. Dice el señor senador, que no es de esta ley el artículo que ha suprimido la comisión de reformas, y yo digo que es perfectamente oportuna en esta ley, que así lo pensó el señor senador que me ha precedido en la palabra, como el señor senador por Tucumán, que fueron colaboradores....

**Sr. Frías (U.)**—Pero podemos haber cambiado de ideas, después de cinco años ó seis.

**Sr. Bazán**—Señor presidente: cuando se trata de interpretar la constitución, no sé cómo puede cambiar de ideas, si ese cambio no es bien justificado.

**Sr. Frías (U.)**—No se trata de interpretar la constitución.

**Sr. Bazán**—Voy á demostrar que el congreso ha interpretado perfectamente la constitución, al sancionar este artículo, que pido que se restablezca en las ordenanzas vigentes.

Decía, señor presidente, que las razones que había indicado el señor senador, miembro de la comisión, no son satisfactorias ni bastantes para fundar la eliminación de este artículo. El dice que en la ley de aduana es la oportunidad de fijar en qué clase de monedas se hayan de pagar los derechos, pero la ley de aduana, señor presidente si dice eso, como dice muchas otras cosas que están bien en este proyecto de ordenanzas, es cuando quiere establecer ó introducir alguna modificación de las materias ya contenidas y sancionadas en la ordenanza vigente. Y tan cierto es, que no se determina en la ley de aduana, nada que pueda decirse que es pertinente en este caso, sobre las monedas, que voy á leer el artículo relativo de la ley sancionada el año pasado, y que está vigente en el presente año económico. Es el siguiente, dice: « Artículo 12. El pago de los derechos que se adeudan en todas las aduanas, podrá efectuarse en moneda metálica de curso legal, ó en billetes del banco provincial y del banco nacional, mientras sean convertibles á la vista; y en papel moneda de Buenos Aires y en la plata boliviana, por su valor en plaza, mientras el poder ejecutivo no le fije el que le corresponda, conforme á la ley de la materia ».

Ya se ha dictado la ley, fijando el valor que le corresponde á la plata boliviana; no se ha dictado todavía la ley determinando el que le corresponde al papel moneda de Buenos Aires, porque no se puede dictar semejante ley, porque este papel fluctúa cada día, y en ese caso, como tiene, sin embargo, la aduana que recibir el papel moneda de Buenos Aires, para el pago de los derechos, viene perfectamente á establecer en este código de procedimientos que estamos dictando, la forma en que la tesorería ha de cobrar los derechos de aduana, así como se le marcan los procedimientos que ella ha de obtener para la recaudación de la renta.

No puede, pues, en tal caso, negarse la

conveniencia y la oportunidad de dejar establecido de una manera permanente, cómo es que ha de hacer la contaduría de la aduana las liquidaciones diarias, por las mercaderías que se introduzcan. Esta es verdaderamente la oportunidad. Fijese de una manera permanente esto, y entonces no será necesario llevar á la ley de aduana lo que el señor senador quiere.

He dicho, señor presidente, que esto no puede estar recibiendo variedad de legislación, porque la constitución ha dicho, que el papel que sea circulante en la provincia, se reciba por su valor equivalente en plaza.

**Sr. Frías (U.)**—No dice eso.

**Sr. Bazán**—Por su valor equivalente. Ahora bien, el valor equivalente que ya otra vez el congreso lo ha resuelto por este artículo que ahora se suprime, es el del día anterior, que permite y facilita poder hacer las transacciones del día siguiente, práctica que se ha observado desde la sanción de esta ordenanza, hasta que vino la oficina de cambio; práctica que no ofrece mayores dificultades, y que menos puede ofrecerlas hoy, que si el papel moneda de Buenos Aires se recibe en las aduanas de otras provincias, como creo, se debe recibir por su valor equivalente; y si se recibe, no hay inconveniente alguno para fijarle el tipo á que se cotiza en la bolsa, porque tenemos telégrafos que ligán todas las aduanas de la república, con la aduana de Buenos Aires.

No hay, pues, inconveniente de ningún género, señor presidente, en dejar consignado de una manera permanente en las ordenanzas este principio.

He dicho también, y creo que nada se puede observar en contra, que es inconveniente esta manera de estar tomando términos medios para fijar un tipo oficial, sea el papel moneda de Buenos Aires, sea el papel del banco nacional, porque no se paga en la moneda en que debe pagarse, porque no se paga por su justo equivalente, entonces se viene á defraudar injustamente á los acreedores, en las cantidades que, deben recibir. ¿Por qué se ha de hacer esto, señor presidente? ¿Quién nos autoriza ni quién autoriza al poder ejecutivo para proceder contra la ley, puesto que la ley le fija que pague á sus acreedores, si éstos son empleados, su sueldo, si éstos son contratistas, el contrato, una cantidad determinada de moneda de curso legal? Y digo yo, ¿son equivalentes las cantidades que debe pagar con ese tipo oficial que le fija? De ninguna manera, señor presidente.

Esto es lo que viene á traer el desprestigio de las obligaciones del gobierno: convenzámonos de esto; esto no es ningún

sistema que responda á idea de moral ni de conveniencia alguna.

Si el país, señor presidente, ha de levantarse en su crédito, es por el cumplimiento fiel de sus obligaciones, y no puede decirse que se cumpla fielmente una obligación, pagándola en moneda, que no es tal moneda, en la cantidad debida.

Ha dicho, señor presidente, el señor senador por Jujuy, que nadie ha podido saber que tal artículo estuviese en las ordenanzas. Permítame decirle que esto no es exacto; ha debido saberlo el gobierno, ha debido saberlo la tesorería y la contaduría, porque todos los empleados de la administración deben conocer las leyes que aplican ó deben aplicar. Así es, que en esto veo una falta muy censurable en aquellos empleados, que por su posición, por los deberes que deben llenar, no han advertido de ello al poder ejecutivo cuando trataba de fijar el tipo á estas monedas, tomando un término medio, arbitrario, injusto, antilegal y anticonstitucional también, señor, presidente.

No diré más al respecto, señor presidente, porque creo que nada más se puede decir sobre este punto. Insisto sí, en que aquí en las ordenanzas se restablezca el artículo suprimido, expresándose que no sólo la tesorería tiene que hacer los ajustes sobre ese tipo que debe la contaduría fijarle al papel moneda de Buenos Aires, sino también al papel del banco nacional.

En estos términos propongo el artículo, con esta modificación.

**Sr. Oroño**—Yo desearía, señor presidente, acompañar al señor senador que deja la palabra, en la proposición que hace para restablecer el artículo suprimido en las ordenanzas de aduana, pues me parece que el señor senador por Jujuy, ha dicho perfectamente que este artículo no corresponde á las ordenanzas de aduana, que es la ley de procedimientos sobre la manera cómo se han de cobrar los derechos, por los artículos que se introduzcan en las aduanas, ya sea de tránsito ó para el consumo, pero cuando se trata de la forma en que se deben pagar los derechos, debe consignarse en la ley de aduana.

Parece que el señor senador por La Rioja, quisiera hacer adoptar esta medida por el senado, sólo por la razón de que no quedará en vigencia tan pronto como él desea. Por eso es necesario que se haga la fijación del tipo, porque si nos remitimos á la ley de aduana tendremos que esperar á que esta ley sea sancionada por el congreso, y quizá pasarían quince días, un mes, ó quizá dos (eso, no podemos termi-

narlo), y se seguiría procediendo de la manera irregular que él ha indicado, haciendo la fijación del tipo cada mes, en vez de hacerse cada día como debiera ser.

Pero quizá pudiera encontrarse algún otro temperamento, que conciliase la idea del señor senador, con la propiedad de la colocación de este artículo, porque no es de las ordenanzas de aduana ni debe ser y si en ellas ha estado fijado por mucho tiempo, es por la misma razón de que no se ha apercibido de ello el gobierno, y por eso es también que ha hecho la fijación del tipo á los treinta días. Así también nosotros hemos dejado pasar ese artículo en las ordenanzas de aduana anteriormente, sin advertir que no correspondía á ellas sino á la ley de aduana. La ley de aduana establece la graduación de los derechos que se han de pagar, y dice, se pagarán en tal moneda, sea metálica, ó papel moneda corriente en plaza, por su valor equivalente y como consecuencia de esto, ha debido decir también, y la fijación de ese tipo se hará diariamente, en vez de hacerse cada treinta días.

**Sr. Bustamante**—Recordaré al señor senador, que ya había dicho que en la cámara de diputados se ha presentado un proyecto, que se discutirá muy pronto, determinando cada cuánto tiempo se ha de fijar ese tipo.

**Sr. Bazán**—Yo debo observar al señor senador, que este artículo suprimido en el proyecto de reformas, está vigente, y que el poder ejecutivo no puede acogerse á ignorancia ó á descuido, para no aplicar la ley dictada por el congreso, y digo que está bien aquí este artículo, señor presidente, porque él viene á marcar el procedimiento que tiene que seguirla tesorería, que es lo que hacen todos los demás artículos de esta ley reglamentaria de procedimientos de aduana.

Ahora, si se quiere decir que por esta ley dictada hace pocos días, hemos consignado que la que debe aplicarse es la ley de 1863, es decir, la ley aquella que fijaba un valor á las monedas que debían entenderse de curso legal, yo digo señor, que si hemos derogado aquella ley de moneda que dimos, donde se fijaba el tipo que debían tener las monedas extranjeras, y ahora aceptamos la del año 63, y dejamos quede tal como está proyectado aquí, en el proyecto de reformas, no hay inconveniente, pero lo que no podemos consentir ni aceptar, es que el papel moneda se cotice de distinta manera de aquella que es conveniente, y justa, y así lo entendió el congreso, cuando sancionó en las orde-

nanzas vigentes, el artículo que establece la forma en que la tesorería ha de hacer las liquidaciones diarias.

Anteriormente, he leído el artículo de la ley de aduana, en que se dice la clase de moneda que debe recibirse en pago; pero en ese artículo, como se vé, no se fija el tipo al cual se ha de ajustar la tesorería en sus procedimientos. Repito, como ahora tratamos de darle una norma de procedimientos á la contaduría, es, pues, la oportunidad de que dejemos vigente en las ordenanzas de que nos ocupamos, este artículo y no esperar aquel otro proyecto de ley por separado que, se nos ha dicho está en tramitación por la cámara de diputados.

Estas son, señor presidente, las observaciones que tenía que hacer. Si después el congreso cree que esta no es la verdadera inteligencia del artículo constitucional, adoptará cualquier otro temperamento; pero, entre tanto, es justo, es conveniente y es legal, que restablezcamos en el proyecto de las ordenanzas, este artículo indebidamente suprimido.

**Sr. Cortés**—Me encuentro enteramente de acuerdo con las ideas que ha manifestado el señor senador por La Rioja, y estoy como él, porque se sostenga el artículo de las ordenanzas de aduana; tal como existe él, es una disposición vigente, y por consiguiente, está equivocado el señor senador por Santa Fe, suponiendo que sólo empezaría á regir en el año próximo, si las ordenanzas actualmente en discusión, fuesen sancionadas, conservándose en ellas el expresado artículo. Esto no es así; ahora mismo es una disposición legal y vigente, pues el decreto del poder ejecutivo no ha podido en manera alguna derogarla.

**Sr. Oroño**—¿Me permite el señor senador que le haga una observación?

**Sr. Cortés**—No tengo inconveniente.

**Sr. Oroño**—Por la ley que estamos discutiendo, se establece que las nuevas ordenanzas empezarian á regir desde el año próximo.

**Sr. Cortés**—Pero las viejas están rigiendo y el artículo que desea conservar el señor senador por La Rioja, pertenece á aquéllas.

**Sr. Oroño**—Quiere decir, que si nosotros sancionamos esta ley, si este artículo no se modifica, entonces resulta, que el artículo que el señor senador por La Rioja propone, no se pondría en práctica, porque la vigencia de las ordenanzas no se haría sino el año que viene.

**Sr. Cortés**—Creo que se equivoca el

señor senador; porque es una disposición vigente, y si la conservásemos en la nueva ley, no se habría derogado y seguiría rigiendo.

**Sr. Oroño**—Habrá error en la redacción del proyecto: pero dice clara y terminantemente, las nuevas ordenanzas empezarán á regir el año que viene y no habla de los artículos introducidos, sino de las ordenanzas en general.

No dice los nuevos artículos de las ordenanzas; habla de las ordenanzas en general; de manera que el señor senador, para acceder al deseo que el señor senador por La Rioja manifestaba, de dejar subsistente ese artículo, tendría que modificar en esta parte la redacción....

**Sr. Cortés**—Creo que no es necesario, porque si conservamos en la nueva ordenanza el artículo como existía, aunque ésta no empiece á regir sino desde enero, seguirá rigiendo la ordenanza actual, y, por consiguiente, no tendría aplicación lo que dice el señor senador.

Por lo demás, tampoco estoy conforme en que haya impropiedad alguna en que esa disposición exista en las ordenanzas, porque nada es más propio que prescribir á la aduana en qué moneda debe hacerse el pago de los derechos fiscales, y por qué valor se ha de recibir esa moneda en una palabra, reglamentar el pago de los derechos.

Pero, demos por sentado que hubiese cierta impropiedad en esta reglamentación; eso no sería una razón suficiente para derogar una ley que es conveniente é indispensable, como lo prueba el hecho de haberse presentado recientemente en la cámara de diputados, un proyecto estableciendo la forma y el valor en que ha de recibirse el papel moneda.

Ese proyecto se ha presentado, sin tenerse en cuenta que había una ley vigente, y en vista sólo de la necesidad que se sentía de poner coto á los abusos á que se ha hecho referencia.

La constitución manda que dicha moneda se reciba por el valor que tenga en plaza, y es un falseamiento de esta prescripción constitucional, ordenar que se admita por el valor que tenía quince días atrás; se entiende por precio corriente el que una cosa tiene actualmente y no el que antes hubiese tenido.

Por consiguiente, el decreto del poder ejecutivo es contrario á la ley y á la constitución.

Creo, pues, que debemos mantener en vigencia la disposición legal que trata de derogarse, pues estando enteramente con-

forme con el artículo de la constitución á que me he referido, viene á cortar todos los abusos que se cometen diariamente.

**Sr. Frías (U.)**—Me parece, señor presidente, que la disposición que trata de establecerse, aun en el supuesto que ha de regir inmediatamente, sería mejor presentarla por medio de una ley especial. Y yo creo que los señores senadores, especialmente el de La Rioja, están equivocados, cuando creen que está vigente el artículo 95 de las ordenanzas que han leído.

Hace poco que el congreso ha dictado una ley, cuyo artículo 1.º dice lo siguiente: «Los billetes metálicos del banco de la provincia y los billetes del banco nacional, se recibirán en la administración de rentas nacionales, en la misma forma establecida para la moneda corriente de Buenos Aires, por el artículo 1.º de la ley de 21 de mayo de 1863».

Y el artículo 1.º de esa ley dice: «El papel moneda de la provincia de Buenos Aires, se recibirá en todas las administraciones de renta, por su justo equivalente, con arreglo al cambio en la plaza de Buenos Aires». Esto es lo que está en vigencia, señor presidente.

El poder ejecutivo, según la constitución, tiene facultad de reglamentar las leyes, y es en virtud de esa facultad, que ha dicho cómo se ha de determinar el precio de la moneda corriente y de los billetes que se reciben en las aduanas.

¿En dónde está, pues, la inconstitucionalidad que encontraba el señor senador por La Rioja? Sólo en el caso de que el poder ejecutivo no tenga facultad de reglamentar las leyes, se puede decir que no ha podido dar ese decreto.

Yo, por mi parte, no acepto, como miembro de la comisión de hacienda, la modificación que propone el señor senador por La Rioja.

**Sr. Bazán**—Hay algo de original en el modo de entender las leyes que dicta el congreso, ó más bien, cierta clase de documentos que se traen aquí á la discusión, sobre los cuales estamos pensando siempre de una manera distinta, con el señor senador por Tucumán.

La ley que ha leído el señor senador, no puede en manera alguna autorizar al poder ejecutivo á dar el decreto arbitrario que ha dictado. Esa ley que acaba de leer el señor senador, no dice absolutamente nada más, que lo que dicen las ordenanzas de aduana vigentes, que se reciba el papel moneda de Buenos Aires por su equivalente, con arreglo al cambio en la plaza de Buenos Aires. Esta disposición de la ley, no ha

podido autorizar al poder ejecutivo para derogar una ley vigente del congreso, que ordena que el precio del papel moneda de Buenos Aires, sea á su tiempo fijado por la contaduría, y remitido á la tesorería el cambio á que hubiese quedado el día anterior. ¿Cómo puede el poder ejecutivo tener facultad para derogar esta ley?

**Sr. Frías (U.)**—Está derogada.

**Sr. Bazán**—No es exacto, permítame que se lo diga. La ley dice que el papel moneda de esta provincia se reciba por su justo equivalente al cambio de la plaza de Buenos Aires; y yo le pregunto al señor senador, si lo que dispone el decreto es únicamente resolver cómo se ha de fijar la equivalencia que está ya determinada por la ley.

Es necesario que el señor senador sepa que las leyes claras, expresas y terminantes, no se derogan nunca por decretos del poder ejecutivo. Para derogar una ley del congreso, es necesario que venga otra ley, también clara y terminante, derogando la anteriormente dictada, y el señor senador sabe que no hay semejante ley dictada por el congreso, con posterioridad á las ordenanzas vigentes.

**Sr. Frías (U.)**—Esta ley sancionada por el congreso hace cinco ó seis días, ¿no es ley?

**Sr. Bazán**—Es ley, pero cumple el pensamiento del señor senador.

**Sr. Frías (U.)**—Dice cómo se ha de recibir el papel en las aduanas.

**Sr. Bazán**—¡Es cosa famosa, señor presidente!

**Sr. Frías (U.)**—Agradezco mucho á mi honorable colega, senador por La Rioja, la lección de jurisprudencia que se ha servido darme....

**Sr. Bazán**—No he dado lecciones, he deplorado únicamente la desinteligencia que hay en la manera de entender estas disposiciones.

**Sr. Frías (U.)**—Agradezco, porque debo agradecerle, la lección que me da. Yo no quiero darle lecciones al señor senador, pero sí quiero recordarle el texto de la constitución, que dice lo siguiente en su artículo 86: «El presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones»...las enumera y en seguida agrega: «expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios, para la ejecución de las leyes de la nación»; como esta ley que acaba de darse no hace quince días.

**Sr. Bazán**—No hay ley de la nación.

**Sr. Frías (U.)**—He concluido, señor presidente.

**Sr. Bazán**—Sería monstruoso que el

poder ejecutivo tuviera la facultad de derogar las leyes reglamentarias de la nación.

**Sr. Oroño**—Como he estado en oposición á la idea del señor senador por La Rioja, debo manifestar la razón que me ha inducido á proceder así. Entiendo, como el señor senador, la ley vigente, es decir, entiendo que el poder ejecutivo no puede, á pesar de la facultad constitucional que tiene de reglamentar las leyes, entiendo que no puede modificarlas. Y esto vendría á resultar si, á pesar de estar vigente este artículo, el poder ejecutivo viniera á modificarlo por un decreto; pero no es sólo lo que yo he sostenido y sostengo, á pesar de las opiniones contrarias; lo que yo sostengo es, que este artículo no es materia de las ordenanzas de aduana, sino materia de la ley de aduana.

Si se ha puesto en las ordenanzas, á mi juicio, se ha puesto mal, y creo que debiéramos felicitarnos de tener ocasión de suprimirlo de allí, para ponerlo en la ley, que es donde debe estar. Esto no traería sino 15 ó 20 días de perjuicio para los acreedores y empleados, perjuicio que sería insignificante. Entre tanto, habríamos corregido una irregularidad, colocando esa disposición donde debe estar.

¿Qué tienen que hacer las ordenanzas de aduana con la fijación del tipo del papel moneda? Aún cuando algo tuviera que ver la disposición que lo fija, es una cosa completamente ajena á la materia de que se ocupan las ordenanzas.

Por consiguiente, señor presidente, si hay un proyecto de la cámara de diputados, que está próximo á discutirse, determinando en qué deben hacerse las liquidaciones y la fijación del precio del papel moneda, es preferible que esperemos los pocos días que faltan para que se sancione ese proyecto y podamos nosotros modificarlo, estableciendo que se haga diariamente la fijación del valor del papel moneda, con relación al oro; es preferible eso, á la sanción de este artículo.

Por estas consideraciones, yo insisto en oponerme á la permanencia de este artículo en las ordenanzas de aduana.

**Sr. García**—Para votar, señor presidente, la proposición hecha por el señor senador por La Rioja, necesito saber si el artículo anterior queda subsistente en las ordenanzas, tales como regían antes; porque entiendo, que lo que propone el señor senador por La Rioja, es una consecuencia indispensable del otro, y que si se sanciona el otro, no puede dejar de sancionarse éste.

**Sr. Bustamante**—El artículo anterior que contienen las ordenanzas, viene acep-

tado por la cámara de diputados. La comisión no habría hecho observación alguna al respecto; pero mi opinión era que se eliminase completamente de las ordenanzas, porque ellas dicen que los derechos pueden ser pagados en todas las monedas legales, por su valor corriente en plaza, conforme á la ley de monedas, y porque eso lo dice todos los años la ley de aduana.

Por consiguiente, mi opinión es que se elimine este artículo; pero no sé si los demás miembros de la comisión estarán conformes.

**Sr. Villanueva**—Por mi parte, también acepto.

—Aceptada la supresión del artículo, por la comisión, se votó, si se suprimía ó no, y resultó afirmativa de 12 votos contra 11.

**Sr. García**—Ahora es inútil el artículo siguiente, porque ya no tiene objeto.

**Sr. Argento**—Yo creo que debe votarse, porque es el que estaba en discusión.

**Sr. Frías (U.)**—Se han estado discutiendo los dos.

**Sr. Presidente**—¿Desearía el señor senador que se vote?

**Sr. Argento**—Sí, señor; que se vote, aunque sea rechazado, para salvar la forma.

**Sr. Frías (U.)**—Se han discutido los dos.

**Sr. Presidente**—La modificación propuesta por el señor senador por La Rioja, abraza los dos artículos, de manera que no es necesario votar; pero se votará si el señor senador lo desea.

**Sr. Argento**—Sí, señor; así se verá que ha obtenido el mismo resultado; pero se salvará la forma.

**Sr. Secretario**—El artículo 195 de las ordenanzas vigentes, no existe en el proyecto, ha sido suprimido por la cámara de diputados, y el señor senador Bazán había propuesto que se restableciera, modificándose al mismo tiempo, el artículo que ha sido eliminado.

**Sr. Argento**—La moción del señor senador Bazán ha sido suficientemente apoyada.

**Sr. Frías (U.)**—Y ha sido desechada. Así es que, parece que no debiéramos seguir adelante.

**Sr. Argento**—Pero como la moción del señor Bazán ha sido suficientemente apoyada, debía votarse.

**Sr. García**—Lo que proponía el señor senador que hizo la moción, era que se sostuviera en la ley este artículo, que viene suprimido por la sanción de la cámara de diputados y por el proyecto reformado por la comisión. Esta moción ha sido

apoyada, y nada más justo que se vote si se admite ó no el artículo; quiere decir, que los que han votado porque se rechace el artículo anterior, votarán ahora en el mismo sentido.

**Sr. Presidente**—Me parece que hay confusión en el modo de apreciar las cosas: el proyecto de la comisión importaba la eliminación del artículo que estaba en las ordenanzas vigentes, como el que se ha votado es un artículo que pertenece á una reforma hecha, el señor senador por La Rioja propuso un artículo que abrazaba los dos, que por las reformas viene suprimido.

**Sr. Bazán**—Lo que propuse era que se modificase el artículo que viene de la comisión, y que ahora acaba de eliminarse.

**Sr. Presidente**—Exactamente.

**Sr. Bazán**—Y se restableciera, en consecuencia el otro, que podría, sin embargo, recibir la siguiente modificación.

**Sr. Presidente**—Es lo mismo que estoy diciendo, de manera que suprimido este artículo, no encuentro objeto en votar este otro; pero si la cámara quiere que se vote, se votará.

**Sr. Bazán**—Se ha dicho, señor presidente, que no es en las ordenanzas la oportunidad de consignar este artículo; se ha dicho también, que en la ley de aduana se determina la clase de moneda en que se han de pagar los derechos, pero si es verdad, que están ya fijadas en la ley de aduana las diferentes clases de moneda en que se ha de pagar, nada hay, sin embargo, que se refiera al tiempo que debe atenderse para la liquidación que haga la tesorería, cuando el tipo de esas monedas, con relación al oro, varíe; y como estamos tratando ahora, de establecer las reglas de procedimientos á que la tesorería debe ajustarse, no creía que fuera inoportuno sancionar este artículo, para que quede de una manera permanente reglamantada en esa ley, la forma ó el modo de proceder de esa oficina, cuando haya de recibir las monedas de que se trata en la ley de aduana, toda vez que tengan fluctuaciones en la plaza.

De consiguiente, el senado haría bien en restablecer este artículo, porque sus disposiciones son las únicas convenientes y las únicas legales y constitucionales; pero si el senado cree otra cosa, cómo ha de ser!

**Sr. Oroño**—Si la ley de aduana establece la clase de moneda en que se ha de pagar, y la forma en que deben recibirse los billetes de Buenos Aires y del banco nacional, lo demás que se refiere á la fijación del tipo, es materia administrativa.

**Sr. Bazán**—¡Cómo va á ser materia administrativa!

**Sr. Oroño**—Es materia administrativa, es de reglamento, que el gobierno, según el caso, y en cada momento, puede dar variedad al tipo que ha fijado, por ejemplo, los del mes, ó semana siguiente, según las necesidades; no puede ponerse en una ley de carácter permanente, porque, entonces, encontraría el señor senador completamente ligada esa disposición, sin poder retroceder de ella, cualquiera que fuera la circunstancia que viniese. Es una disposición de carácter transitorio, administrativo simplemente.

**Sr. Bazán**—Yo no creo que sean de carácter administrativo las resoluciones fijando el tipo al papel moneda.

El tipo del papel moneda con relación al oro, lo fija el comercio y debe aceptarse como se encuentra fijado en la plaza, y la ley del congreso dirá, como lo ha dicho ya en las ordenanzas vigentes, que se tome el tipo del día anterior, para las liquidaciones del siguiente. Esto es lo justo y legal, y á lo que debemos darle un carácter legal, y una vez que lo tenga, como lo tiene hoy mismo, no puede el poder ejecutivo venir á hacer variaciones sobre ello. No se puede tampoco decir que haya conveniencia en andar tomando esos términos medios, que al fin no son otra cosa que expedientes poco dignos de disminuir á los acreedores del gobierno, lo que legítimamente se les debe abonar.

**Sr. Oroño**—Pero el gobierno no puede tener ese propósito ó puede equivocarse.

**Sr. Bazán**—Estamos viendo que el gobierno lo ha hecho.

**Sr. Oroño**—Puede equivocarse en su apreciación; pero no con el propósito de despojar á los acreedores ó á los empleados, de lo que es suyo,

**Sr. Bazán**—Yo me fijo en que se ha hecho un verdadero despojo á los empleados y á los acreedores por contrato.

**Sr. Cortés**—Yo creo, señor presidente, que el señor senador por Santa Fe confunde esta materia: lo que es puramente administrativo, y debe ser propio del poder ejecutivo, con lo que incumbe al congreso.

**Sr. Oroño**—Es un poco difícil.

**Sr. Cortés**—El gobierno determinará en cada caso el tipo que debe regir para el papel, pero incumbe al congreso establecer la forma en que ese tipo debe ser fijado; y así se ha entendido también en la cámara de diputados, donde se ha propuesto un proyecto sobre esto.

Entonces, si bien estamos convenidos todos en que el poder ejecutivo es quien ha de decir cuál es el tipo, no se puede negar al congreso la facultad de reglamen-

tar la forma en que se ha de fijar, para que no se verifique de un modo caprichoso, que deje burlada la prescripción constitucional.

Corresponde incuestionablemente al congreso, reglamentar el ejercicio de las facultades conferidas al ejecutivo; y es esto, precisamente, lo que hacemos, cuando le damos reglas de administración.

**Sr. Argentó**—Hago moción para que se dé el punto por suficientemente discutido.

—Aceptada esta moción, se votó si se aceptaba el artículo propuesto por el señor senador por La Rioja, y resultó negativa de 6 votos contra 15.

**Sr. Secretario**—Ahora falta la forma en que debe suprimirse el artículo 195.

**Sr. Frías (U.)**—Se expresa en el proyecto de ley.

**Sr. Secretario**—Agregar al artículo, con el número 440, lo siguiente (leyó como sigue): «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo.... la contaduría de la aduana hará un balance mensual de los permisos de toda clase, para la importación y exportación, á fin de cerciorarse de que no han sido sustraídos, ó se han extraviado, y si

hay algún motivo que retarde ó impida su liquidación.

«Igual balance hará la misma oficina, cada cuatro meses, de las guías que hubiese expedido la aduana, para el transporte de mercaderías de un lugar á otro de la República.

«El resultado de estos balances se consignará en un libro especial, bajo la firma del jefe de la oficina, y se comunicará por escrito al administrador de rentas, para que en su caso tome las medidas necesarias en favor de los intereses del fisco».

**Sr. Presidente**—Se va á votar esta enmienda.

—Se votó y fué aprobada, como lo fué en seguida el artículo 2.º. El artículo 3.º es de forma.

**Sr. Presidente**—Queda concluída la consideración de este asunto.

Se fijará como orden del día de la sesión próxima, el proyecto de ley sobre inmigración y colonización, levantándose la presente.

—Así quedó resuelto. Eran las cinco y media de la tarde.